



# AINKAA

Revista de Estudiantes de Ciencia Política  
Volumen 4 - N° 7 / e-ISSN: 2590-7832  
Enero - junio de 2020

## Movilización social en el Oriente antioqueño: del pasado al presente

Los casos del Movimiento  
Cívico del Oriente  
antioqueño y el Movimiento  
Social por la Vida y la Defensa  
del Territorio (MOVETE)

**Andrea Betancur Pérez**

**Catalina Rodas Tamayo**

**Sara Isabel Vásquez**

Universidad Nacional de  
Colombia, Sede Medellín





AINKAA

---

# Movilización social en el Oriente antioqueño: del pasado al presente

---

Los casos del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño y el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (MOVETE)

---

Andrea Betancur Pérez<sup>1</sup>

Catalina Rodas Tamayo<sup>2</sup>

Sara Isabel Vásquez<sup>3</sup>

## Resumen

El Oriente antioqueño ha sido una de las regiones más codiciadas por los grandes capitales, debido a sus abundantes recursos naturales y su ubicación estratégica; por esta razón, se han presentado procesos de resistencias relacionados a los proyectos “generadores de desarrollo” que el neoliberalismo ha potenciado. El actual trabajo, se concentra en dos de estos movimientos de resistencia: el Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, que se presenta como

---

1. Estudiante del pregrado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. [anbetancurpe@unal.edu.co](mailto:anbetancurpe@unal.edu.co)

2. Estudiante del pregrado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. [dicrodasta@unal.edu.co](mailto:dicrodasta@unal.edu.co)

3. Estudiante del pregrado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín [sivasquezj@unal.edu.co](mailto:sivasquezj@unal.edu.co)

uno de los más importantes movimientos a nivel nacional durante la segunda mitad del siglo XX, y Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (MOVETE), que surge a partir de 2013; presentando una continuación lógica y discursiva en relación con el Movimiento Cívico anteriormente mencionado. Estos movimientos serán analizados bajo un enfoque latinoamericanista y una lógica de justicia desde la redistribución, el reconocimiento, y la representación.

**Palabras clave:** movimiento social, Oriente antioqueño, justicia, desarrollo, territorio.

## El Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia

Las luchas del Movimiento Cívico se consolidan como grandes esfuerzos por parte de la sociedad civil de hacer realidad su visión de territorio endógena y construida, en lugar de aquella que el desarrollo neoliberal pretendió implantar; representando “un largo ciclo de luchas con una dinámica socio geo-histórica discontinua de movilización, organización y convergencia” (Novoa, 2009, p. 93). De manera que, dentro de los primeros hechos que desencadenaron esa serie de luchas por parte del movimiento cívico, se encuentra el proceso de electrificación en la década de los 60, junto con el modelo de desarrollo que se le imponía a esta región por medio de proyectos como:

El parque industrial José María Córdoba, el aeropuerto internacional José María

Córdoba, [...] la autopista Medellín-Bogotá, la imposición del desarrollo hidroeléctrico, [...] materializado en la construcción de embalses y centrales hidroeléctricas, así como en la distribución del servicio por parte de terceros (Acuantoquia, Electrificadora de Antioquia). (Arango, 2018, p. 66)

Es a partir de las dinámicas que se instauran desde estos nuevos proyectos que las comunidades se organizan y luchan por la autonomía de sus territorios y la calidad de vida, siendo el mismo pueblo el que “a través del análisis de sus necesidades, de sus prácticas cotidianas, fue viendo cómo solucionar esas necesidades” (Arcila, 1989, citado por Arango, 2018, p. 65).

Es así como el Movimiento Cívico del Oriente antioqueño tiene sus primeras intervenciones, en la década de los años 60, entendiendo que “hacia los años 60 y 70 van a activar la confrontación territorial contra la implantación de grandes proyectos hidroeléctricos, reclamar por los servicios públicos y protestar contra los abusos de las administraciones locales” (Novoa, 2009, p. 65). Durante esta primera fase, las luchas cívicas que caracterizaron la acción colectiva de este movimiento, estaban enmarcadas bajo un proceso localizado de organización y protesta. Entre 1960 y 1982, dentro del repertorio de movilización, el paro cívico, las amenazas de paro o marchas, las marchas y manifestaciones, los bloqueos o tomas y las asonadas, fueron las principales estrategias empleadas (Novoa, 2009).

Sus luchas estuvieron caracterizadas por actores diversos, en tanto:

Estudiantes, profesores, artesanos y desempleados eran la avanzada beligerante de los paros, con la presencia masiva de pequeños y medianos campesinos, y jornaleros. En relación con las organizaciones obreras que tienen presencia en el área [...], las relaciones fueron bastante difíciles por su gremialismo, llegándose a presentar enfrentamientos. Sin embargo, líderes sindicales participaron activamente en la conformación de juntas locales y jugaron un rol muy activo en el fortalecimiento del movimiento regional. (Novoa, 2009, p. 84)

Igualmente, a este movimiento se integraron sectores sociales como “campesinos desplazados de la violencia, habitantes de barrios marginales, vendedores ambulantes, campesinos en su origen natural, pobladores de los barrios, sacerdotes católicos que habían tomado su opción por los pobres, monjas, etc.” (Arcila, 1989, citado por Arango, 2018, p. 64).

Ahora bien, al hablar de las motivaciones en el accionar de este movimiento, se tiene en cuenta que el surgimiento del Movimiento Cívico estuvo anclado a las necesidades que los habitantes de las comunidades iban percibiendo, enmarcado bajo ese aspecto desigual del desarrollo de las regiones. Como lo expone Novoa (2009) citando a Arcila (1989), el movimiento “en el diario discurrir y sobrevivir fue identificando sus necesidades más sentidas y por ellas empezó a luchar el agua, la energía, el alcantarillado, el camino, la carretera, la escuela, el hospital [...]” (p. 16).

Por lo tanto, una de las principales motivaciones se dio a partir de la problemática de los servicios públicos en diferentes municipios, allí comenzaron a emerger las primeras manifestaciones de acciones cívicas en la región del Oriente antioqueño. Las primeras manifestaciones se dan en Marinilla y Rionegro cuando se pretende subir el precio de los servicios públicos, conformándose una Junta pro-defensa y logrando detener la medida. Posteriormente en Sonsón, se propone que el acueducto, que hasta entonces era manejado por el mismo municipio, pase a ser manejado por Acuan-tioquia, lo que ocasiona la formación de la junta pro-defensa de la autonomía municipal. De manera que “las acciones cívicas por los servicios públicos se siguen presentando y alrededor de ellas se iban sumando más motivos” (Novoa, 2009, p. 67).

Cuando comienza la expansión del sector eléctrico en Antioquia se propone ubicar las represas en el Oriente del departamento, ya que sus características geográficas eran apropiadas para dicho proyecto. Sin embargo:

La inconformidad de los pobladores de El Peñol y Guatapé debido a la imposición de esta mega-obra por encima del querer de toda una comunidad y las maneras propias de habitar el territorio por parte de los campesinos, propició el surgimiento de un fuerte movimiento cívico, que canalizó la voz de los afectados. (Olaya, 2017, p. 131)

Esta inconformidad de los ciudadanos sale a la luz pública en 1981 debido a que la electrificadora notifica un alza de

las tarifas de hasta 35%, lo que provoca un rechazo inmediato por parte de la comunidad, quienes como forma de protesta a través de asambleas populares se ponen de acuerdo en dejar de pagar las cuentas cuando comienzan a llegar con incrementos del 9%. A esta iniciativa, la empresa responde con la suspensión del servicio y la comunidad reacciona para impedir esta situación, lo que ocasiona que varios integrantes del Movimiento Cívico sean detenidos por la policía. La electrificadora se dedicó a desacreditar el movimiento por medio de una campana en su contra, a la vez que se prohibieron asambleas populares en varios municipios. Aun así, la ciudadanía cada vez se vinculaba más a la protesta (Olaya, 2017).

En 1982 se constituye la Coordinadora Regional de Juntas Cívicas Pro-Defensa de los Usuarios de la Energía, integrada por representantes de cada municipio. Este organismo tenía como objetivo la representación ante el gobierno para exigir que se liquidara la electrificadora. Sin embargo, el gobierno no se prestó para negociar y se tuvo que recurrir a otros mecanismos, como el paro cívico regional. El primero de estos, el 9 de septiembre de 1982, duró 48 horas y se vinculó a 13 municipios, que declararon un cese total de las actividades.

En medio de esta movilización, en los municipios de Marinilla y San Carlos “se realizaron grandes manifestaciones en las que se quemaron llantas, se bloqueó el tránsito de vehículos y se produjeron pedreas y enfrentamientos con la policía, teniendo como resultado varias personas heridas” (Olaya, 2012, p. 102). Además, fueron detenidos 510 manifestantes y

como respuesta se determinó un paro cívico indefinido hasta que los detenidos no fuesen puestos en libertad y las peticiones fueran atendidas. El 12 de septiembre de 1982 se estableció un pre-acuerdo y se levantó el paro planteando, aún así el condicionante fue, si en un mes no eran cumplidos los acuerdos se convocaría a una protesta de mayores dimensiones.

“Ante el incumplimiento de los acuerdos a los que se llegó con el movimiento anterior y la negativa del gobierno para el diálogo, se decidió convocar al segundo paro cívico, esta vez con carácter indefinido” (Olaya, 2017, p. 134). En medio de las protestas se notificaron varios muertos y heridos a manos de la fuerza pública a raíz de los enfrentamientos contra la población, así como bloqueos en diferentes vías, paro de todo el comercio, apedreadas, arremetidas por parte de la policía contra las marchas y saboteo a las estaciones de energía (Olaya, 2012). Los resultados de este paro no fueron muy diferentes al anterior, después de unos acuerdos para su levantamiento, se incumplen los puntos pactados y se da el nacimiento a un tercer paro cívico.

Este tercer paro cívico es convocado en 1984, caracterizado por manifestaciones en municipios como Rionegro, parálisis del transporte y quema de vehículos en diferentes municipios que apoyaban el movimiento, cese del comercio de todo el Oriente y el bloqueo tanto de la autopista Medellín-Bogotá como de otras vías de la región. El paro tuvo la misma finalidad que los anteriores: rechazar las tarifas de la energía eléctrica.

Pero los gobernantes departamentales y nacionales, representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, desoyeron las peticiones de los pobladores; dejaron pasar los días sin atender las justas reclamaciones, desgastando la protesta, pues no estaban dispuestos a gobernar en función de las necesidades y aspiraciones populares. (Olaya, 2017, p. 136)

Al concluir este tercer paro surge una gran amenaza en contra de los líderes del Movimiento Cívico, pues en los diarios regionales y nacionales fueron tildados peyorativamente poniéndolos en la mira de grupos paramilitares. Estos grupos “se consolidaron con el auspicio de altas esferas del Estado, quedando en su mira todo aquel que se había atrevido a cuestionar los manejos político-administrativos, bajo el estigma de que hacían parte de los grupos subversivos” (Olaya, 2012, p. 112).

Es así, como comienza el asesinato sistemático a líderes de dicho movimiento y la criminalización de su propuesta. Casos como el de Julián Darío Conrado, asesinado el 23 de octubre de 1983, vinculado a la junta cívica de San Carlos y Jaime Giraldo e Iván Castaño en 1984, fueron significativos en esta masacre. Es precisamente allí donde “los escuadrones de la muerte recrudecieron sus acciones contra los habitantes [...], a tal punto que en tan sólo algunos meses acribillaron a treinta pobladores” (Olaya, 2017, p. 138). Este hecho fue denunciado ante las autoridades por los líderes del Movimiento Cívico.

Se perpetraron trágicos homicidios, como el de Ramón Emilio Arcila, uno de los grandes líderes e ideólogos del

movimiento, asesinado el 30 de diciembre de 1990, así como a personajes reconocidos de las movilizaciones:

Gabriel Velásquez Urrego (28 de febrero de 1986); William Genaro Tamayo (20 de marzo del 1986); Froilán Arango Echavarría (28 de noviembre de 1987); Jorge Alberto Morales Cardona (11 de abril de 1988); Luis Felipe Noreña (junio de 1988); Alberto Giraldo Castaño (7 de octubre de 1988); Antonio Martínez Moreno (10 de octubre de 1988). (Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño: una persecución que será resarcida, 2018)

El exterminio del movimiento en la década de los noventa, dejó huellas imborrables en el territorio del Oriente antioqueño, no solo por la vulnerabilidad a raíz del conflicto armado, sino también porque se logró construir, según Ávila y Montenegro (2018) citando a García y Aramburo (2011) “una memoria colectiva basada en la injusticia de la política energética del Estado, en la imposición de proyectos sin consulta alguna a las comunidades (p. 387). Memoria colectiva que cultivó en los pobladores del Oriente antioqueño, como lo plantea Ávila y Montenegro (2018) citando a Olaya (2012):

Un sentido de pertenencia territorial basado en la capacidad de organizarse, de unirse y de enfrentar y reivindicar derechos, formas de vida y relaciones sociales y territoriales propias, pero también basado en un sentimiento de descontento en relación con los discursos y prácticas de los

gobernantes, elites y poderes nacionales y regionales que imponen injusticias, violencias y que ignoran sus reivindicaciones y derechos. (p. 387)

A pesar de todo el sufrimiento y la violencia por la que tuvo que pasar el Movimiento Cívico, hubo aspectos positivos dentro de tanto gris: generar un espíritu de lucha y resistencia en el Oriente antioqueño, facilitar el establecimiento de organizaciones que promulgan el desarrollo integral de la región, como Cornare, Corporiente, y la cooperativa Manos Unidas (COOMUN), que le permitieron al Movimiento Cívico gestionar material para documentar aquel hecho histórico y promover sus propuestas, ideas, e incluso denuncias (Arango, 2018).

## Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (MOVETE)

A pesar de la ola de desesperanza que se vivió en el Oriente antioqueño luego del exterminio del Movimiento Cívico, y el intento fallido de su resurgimiento en 1998 con el movimiento “Oriente Unido”, la idea de la luchas y reivindicaciones populares sigue en el corazón de los Orientales. Es así como a partir de 2007 se presentan una serie de actividades comunales que permiten una visión esperanzadora para las actividades colectivas en pro de la defensa del territorio. En 2009 se hace el primer Encuentro Departamental de Servicios Públicos y Pobreza que posteriormente se conocerá como el Festival

del Agua del Oriente antioqueño (Granada y Rupp, 2018) y que será el resurgir del fénix.

Los festivales del agua han sido una gran plataforma de encuentro regional en la que se retoman temas de interés, como lo expresa Johana Higueta<sup>4</sup>, asistente a los festivales, planteando que inicialmente fueron “una excusa para volver a encontrarnos, juntar la comunidad y procesos sociales de la región”. Así pues, cada año a partir de 2009 se realiza una nueva versión del Festival del Agua, en donde se ponen en tela de juicio los parámetros hegemónicos de desarrollo exógeno que plantean las grandes empresas y el modelo económico predominante.

Es con el paro agrario de 2013 que se presenta una coyuntura que propicia y exige una nueva articulación de las diferentes demandas sociales, acompañada del Festival de Agua del mismo año realizado en el Carmen de Viboral, marcan el surgimiento oficial del movimiento, en donde se establece un manifiesto que declara lo siguiente:

Nuestro desacuerdo frente al modelo de desarrollo económico extractivo que profundiza la pobreza, pasa por encima de las comunidades locales, de culturas y sueños colectivos” y “nuestra voluntad de estar juntos, firmes y persistentes en el propósito de la defensa del territorio, la autonomía territorial para ordenar y planear los usos y el destino de nuestros territorios, en un horizonte de construcción de paz y vida digna. (Manifiesto del MOVETE, 2013)

4. Lideresa social en un Grupo Focal realizado por el MOVETE.



Es así como este movimiento pretende defender los bienes comunes naturales y culturales del Oriente antioqueño, con un énfasis especial en el agua, buscando pensar en perspectiva regional, propiciar la unidad en la diversidad, y, ante todo, plantear como bandera de lucha la defensa del territorio (Granada y Rupp, 2018).

Actualmente, el movimiento tiene influencia en 13 municipios del Oriente antioqueño: San Francisco, Cocorná, San Luis, La Unión, Sonsón, Nariño, Argelia, San Carlos, Granada, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla y Alejandría, y cuenta con la vinculación de diferentes organizaciones como: ACA, Asopora, CEAM, Colectivo Antorcha, Conciudadanía, Periferia y Vigías del Río Dormilón de San Luis. Después, en el mismo año se adhiere la Corporación Jurídica Libertad, Kavilando, la Corporación Ambiental Naturaleza y Bosque NATYBOS de San Carlos, las Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Carlos y la Red de Acción Frente al Extractivismo (RAFE), la Tulpa Comunitaria, la Veeduría Ciudadana Ambiental Sonsón y el CTP Sonsón. Cocorná Consciente, Manos de Sol, Colectivo Utopía y Corpoguama (MOVETE, 2018).

Como principales repertorios de movilización, se encuentran los Festivales del Agua, la Caravana por la Vida, el Territorio y la Paz del Oriente antioqueño y el Samaná Fest Comunitario por la defensa del río Samaná (Salazar, 2018). Todos estos repertorios de movilización se salen de las dinámicas que permean las movilizaciones tradicionales, implementando el folclore y elementos de la cultura como

estrategias dinamizadoras de la protesta; en los diferentes actos de movilización se vive la música, el baile, el teatro, y se pretende apoyar los productos de las localidades como potencializadores del apropiamiento y autonomía comunitaria.

Es importante resaltar que el surgimiento y apogeo de este movimiento se presenta en coyunturas de negociación con las Farc y de Pos Acuerdo, es decir, en un periodo en donde la reducción de la violencia por parte de este ex grupo guerrillero fue evidente, permitiendo así una atmósfera de menor tensión. Esto es relevante debido a la forma en que se presenta la re-victimización de algunos campesinos, pues si bien, en el periodo del Movimiento Cívico fueron despojadas cientos de familias por la violencia, con el retorno de las familias a sus tierras, regresan también los procesos minero-energéticos generando un desplazamiento ya no por el conflicto armado sino por los proyectos del desarrollo.

Para el desarrollo de los proyectos de gran envergadura se ha procedido a una serie de desalojos sin cumplir los lineamientos que Naciones Unidas ha estipulado al respecto, como que las comunidades desplazadas por proyectos de desarrollo no pueden ser desalojadas sin tener resueltas sus condiciones económicas, de vivienda y mejoradas sus condiciones de vida. (Soler, 2018)

Como se puede observar, ambos movimientos tienen una bandera de lucha clara: el desacuerdo con el modelo económico imperante, que explota, empobrece y

daña los territorios, costumbres y vida cotidiana (Salazar, 2018, p. 137). Por esta razón un enfoque conceptual característico, que resalta el análisis de estos movimientos sociales, junto con un marco conceptual de justicia/injusticia, será la vía por la cual se evaluará el desarrollo de los dos movimientos anteriormente expuestos.

## Enfoque latinoamericanista de movilización social

Analizar los movimientos del Oriente antioqueño, tanto el Cívico como el MOVETE, desde un enfoque que permita entender las características que estos movimientos poseen, abre el debate sobre los elementos del enfoque latinoamericanista que se presentan en este tipo de movilizaciones. En este sentido, se parte de los aportes teóricos que Maristella Svampa ha brindado al estudio de los movimientos sociales desde América Latina, detallando ciertos hechos que generaron el cambio de las dinámicas económicas y políticas en la región. Aspectos como la *inflexión extractivista*, que estuvo enlazada con el “cambio en el modelo de acumulación del sistema capitalista” (Svampa, 2012, p. 15) y el *consenso de los commodities*, que se basa en “la expansión de proyectos que buscan la extracción y exportación de bienes naturales a gran escala” (Svampa, 2012, p. 15), propician el accionar de los movimientos sociales caracterizados desde el enfoque latinoamericanista.

El nuevo orden que se instaura a partir de estos elementos, conlleva principalmente a la desposesión de los territorios, profundizando “el despojo de tierras, recursos y territorios, al tiempo que genera nuevas formas de dependencia y dominación” (Svampa, 2012, p.17), entendiendo que este desarrollo a partir del extractivismo se genera en los territorios que antes eran considerados como “improductivos”, hecho que tiene consecuencias irreversibles sobre la biodiversidad. El caso de las mega-represas, una de las figuras emblemáticas del extractivismo, repercute en el acaparamiento de tierras, donde los territorios, siguiendo a Svampa (2012) citando a Sack (1986), “escogidos por el capital, son considerados como ‘socialmente vaciables’ o territorios sacrificables” (p. 18).

El avance de estos mega proyectos, en específico las mega-represas, va re-configurando tanto la territorialidad como las comunidades, puesto que “se pone en jaque las formas económicas y sociales, y el alcance mismo de la democracia” (Svampa, 2012, p. 19).

De ahí que surja la crítica latinoamericana hacia esa lógica desarrollista que genera un “cuestionamiento de la visión hegemónica de desarrollo a la luz de la expansión del extractivismo” (Svampa, 2017, p. 50) y a su vez discute la idea de progreso por medio de megaproyectos extractivistas, que a pesar de las diferentes formas de intervención existentes, “presentan una lógica común: gran escala, orientación a la exportación, ocupación intensiva del territorio y acaparamiento de tierras, amplificación de impactos ambientales y socio-sanitarios,

preeminencia de grandes actores corporativos transnacionales y tendencia a la democracia de baja intensidad” (Svampa, 2017, p. 56). Por ende, las movilizaciones que se enmarcan a partir de los conflictos socioambientales, tienden a estar ligadas al “control de los recursos naturales, y el territorio, que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder” (Svampa, 2012, p. 19).

Así mismo, los factores mencionados generan, conjuntamente, la *ambientalización de las luchas sociales*, caracterizado por los movimientos que comienzan a resistir a estos megaproyectos y que “combinan la matriz indígena comunitaria con el discurso ambientalista, que hace énfasis en la defensa de la territorialidad” (Svampa, 2012, p. 15).

La matriz indígena comunitaria, pone en el foco de análisis “la idea de resistencia, derechos colectivos y poder comunal” (Svampa, 2010, p. 81) y se une contra las grandes empresas y el modelo progresista, potenciando las luchas por la tierra promovidas principalmente por movimientos campesinos e indígenas. Al tiempo surgen:

Nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los recursos naturales (definidos como “bienes comunes”), la biodiversidad y el medio ambiente; todo lo cual va diseñando una nueva cartografía de las resistencias, al tiempo que coloca en el centro de la agenda política la disputa por lo que se entiende como “desarrollo sustentable”. (Svampa, 2010, p. 61)

Es así, como los movimientos que están en defensa del territorio, la biodiversidad y la protección de los recursos naturales es necesario analizarlos directamente, desde el enfoque latinoamericano que visibiliza las luchas que se han dado a raíz de una problemática como lo es la extracción y las dinámicas que a partir de esa lógica se instauran. El Movimiento Cívico del Oriente antioqueño y MOVETE, se recogen en los planteamientos desarrollados en tanto sus acciones colectivas, estuvieron y están orientadas hacia ese despertar político de los pueblos, por la defensa del territorio, así lo plantea María Alejandra Villada y Andrés Felipe Jiménez Gómez en su texto *La lucha por la defensa de lo común: aproximación a los conflictos socioambientales desde Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio – MOVETE* (2018):

Hemos reproducido nuestras vidas a través de la relación intrínseca que tenemos con los comunes, entendiéndolos como el agua, los bosques, la tierra, los alimentos y las relaciones comunitarias que tejemos en torno a la gestión, uso, apropiación y cuidado de los mismos. (p. 114)

## Justicia: redistribución, reconocimiento y representación

De acuerdo a la teoría de justicia que desarrolla Nancy Fraser, es posible abordar ambos movimientos siguiendo un marco basado en los elementos de redistribución, reconocimiento y representación. Los

argumentos que plantea a partir de la justicia social exponen, en primer lugar, la necesidad del análisis de la justicia desde la redistribución y el reconocimiento, superando las posibles divergencias que puedan tener, para considerarse como dimensiones propias, que hacen parte de la misma. La dimensión del reconocimiento se ve caracterizada por el análisis al orden social, correspondiendo al estatus de la sociedad “y, por tanto, a la constitución, mediante los patrones de valor cultural enraizados en la sociedad” (Olmos, 2015, p. 10). Ahora bien, la distribución abarca “la estructura económica de la sociedad y, por tanto, a la constitución, mediante los regímenes de propiedad” (Olmos, 2015, p. 10).

Así, la justicia social que plantea Fraser en sus primeras argumentaciones, posee un carácter bidimensional, en tanto la redistribución y el reconocimiento son dos factores que permiten la comprensión de las posibles situaciones de injusticia en sociedad, integrando “las exigencias defendibles de igualdad social [...] y del reconocimiento de la diferencia” (Olmos, 2015, p. 10). En este sentido, se entiende que la bidimensionalidad apunta tanto a una mala distribución como a un reconocimiento erróneo, siendo de vital importancia que ambas se desarrollen a la vez, dado que:

[...] no resulta justo inferir directamente la dimensión económica de subordinación de la cultural, ni la cultural directamente de la económica, por tanto, ni el culturalismo, ni el economicismo de manera aislada bastan para comprender la sociedad contemporánea” (Fraser & Honneth, 2006, p. 55).

Por lo tanto, esa justicia caracterizada por la perspectiva dualista de redistribución y reconocimiento, económica y cultural, respectivamente, permite entender que el estudio de movimientos sociales, su percepción de injusticia y sus demandas se inscriben en ambas direcciones. De ahí que “solo si buscamos enfoques integradores que unan redistribución y reconocimiento podremos satisfacer los requisitos de una justicia para todos” (Fraser, 2006, p. 88).

Además, estas demandas, están inscritas desde una estructura económica y social, es decir, desde el orden de estatus, por lo que:

Los grupos bidimensionales padecen tanto una mala distribución como un reconocimiento erróneo en formas en las que ninguna de las injusticias es un efecto directo de la otra, sino que ambas son primarias y cooriginales. Por tanto, en su caso, no basta ni una política de reconocimiento ni de redistribución por si solas. Los grupos bidimensionalmente subordinados necesitan de ambas. (Fraser & Honneth, 2006, p. 58)

Con lo anterior Fraser establece que tanto el reconocimiento erróneo como la mala distribución son cuestiones fundamentales para abordar la problemática de la injusticia; en tanto estas situaciones pueden ser subsanadas por medio de un enfoque que englobe la redistribución y el reconocimiento. Es ahí donde el concepto de paridad participativa entra en el foco de análisis, Fraser señala:

Para que sea posible la paridad participativa tienen que cumplirse, por lo menos, dos condiciones. En primer lugar, una condición

objetiva, en esta, la distribución de los recursos materiales debe hacerse de manera que garantice la independencia y la voz de todos los participantes de forma que se excluyan los niveles de dependencia económica y de desigualdad que impiden la participación. En consecuencia, quedan excluidos los acuerdos sociales que institucionalicen la privación, la explotación y las grandes disparidades de riqueza, ingresos y tiempo de ocio, que niegan a algunas personas los medios y las oportunidades de interactuar con los demás como iguales. La segunda condición, que se denomina como subjetiva, requiere que los patrones institucionalizados de valor cultural expresen el mismo respeto a todos los participantes y garanticen la igualdad de oportunidades para conseguir la estima social. (Fraser y Honneth, 2006, p. 42)

En este sentido, estos aspectos que se desarrollan desde la justicia social de Nancy Fraser, permiten posicionar a los actores que han hecho parte de movimientos como el Cívico y el MOVETE, bajo la lógica de injusticia toda vez que se les está reconociendo erróneamente en comparación a su visión de comunidad, y la distribución a lo largo de su historia ha sido degradada tanto desde la violencia armada, como desde los proyectos de desarrollo; siendo preciso que, desde el concepto de reparación universal en Fraser (2006) se pueda “utilizar medidas asociadas con una dimensión de la justicia para remediar desigualdades asociadas con la otra, es decir, utiliza medidas distributivas para reparar el reconocimiento erróneo y medidas de

reconocimiento para reparar la mala distribución” (p. 80).

De esta manera, los movimientos del Oriente antioqueño, al velar por la defensa del territorio, buscan que los recursos naturales sean respetados y protegidos, así como el derecho que tienen como comunidad, en tanto sus dinámicas sociales y culturales son configuradas en torno a esas áreas naturales que se pretenden modificar en pro de una visión de desarrollo, que somete a los territorios y las comunidades a su alrededor y que han estado en disputa con las formas de proyección de las comunidades sobre sus territorios (Villada y Jiménez, 2018).

Es por lo anterior, que las luchas desde un marco de injusticia, no puede darse sólo en términos de la lucha por la distribución, dado que esto por sí solo no genera los cambios necesarios, si no se tiene en cuenta el reconocimiento de los rasgos culturales e identitarios, la participación y facultad de decisión de dichas comunidades frente a los megaproyectos extractivistas. De esta manera sería imposible hablar de demandas satisfechas, pues el territorio se conforma como algo más allá de lo material, que adquiere un cúmulo de significados que se configuran en el compartir dentro del mismo, en donde el territorio también se inserta en la identidad propia de cada individuo como un elemento cargado de simbologías.

Como se observa, no es una cuestión que involucre únicamente las demandas en contra de la apropiación de “los comunes”, sino también de la inconformidad respecto a cómo esa apropiación

afecta su vida digna, su sentido comunitario de territorio y de desarrollo. Como lo expresa Carlos Olaya (2018), uno de los grandes teóricos del MOVETE, en el texto *Movete, memorias y resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño*:

Está en disputa la visión de las maneras propias de habitar el territorio. ¿Nosotros que nos disputamos aquí? La manera propia de entender cómo habitamos nosotros este territorio, como lo disfrutamos. ¿Qué nosotros defendemos el agua por qué? Porque sin el río no pudiéramos vivir, porque el río es el medio vital. Entonces estamos disputando la manera en como nosotros habitamos el territorio porque nos van a imponer otra manera distinta de habitarlo. (p. 122)

El territorio adquiere un valor simbólico que configura las realidades de las comunidades, es decir, más allá de la apropiación de un recurso natural, es la apropiación de una parte de sí mismos.

Ahora bien, más adelante Fraser, a partir de nuevos planteamientos desarrolla el análisis de la representación como un factor que se une a las dimensiones de redistribución y reconocimiento, siendo una teoría tripartita. De manera que, al tener estos tres aspectos como base de análisis de un marco de justicia, se permite repensar la sociedad de acuerdo a las tensiones o contextos sociales, que se dan en el caso específico de esas resistencias por la defensa del territorio, hallando las posibles alternativas a las “formas diversas de subordinación y exclusión social” (Olmos, 2015, p. 4) así como la acción de

“promover la modificación de los patrones de valor cultural ya institucionalizados que hacen pervivir los esquemas de injusticia social” (Olmos, 2015, p. 4).

La representación se orienta, entonces, a ese equilibrio entre la redistribución y el reconocimiento, superando la perspectiva dualista, y los vacíos resultantes de una teoría basada únicamente en lo económico y cultural, para abordar lo político y la participación. Así:

Una teoría de la justicia adecuada a nuestra época debe ser tridimensional. Debe permitirnos aprehender el problema del marco como una cuestión de justicia, abarcando no sólo la distribución y el reconocimiento, sino también la representación. Igualmente, debe capacitarnos para identificar las injusticias debidas a la falta de un marco adecuado y para evaluar los posibles remedios incorporando las dimensiones económica, cultural y política. (Fraser, 2006, p. 41)

En el caso de MOVETE se ha planteado como fundamental la visualización del movimiento en el ámbito político, como también lo hizo en su momento el Movimiento Cívico, que logró consolidar líderes de representación política. El MOVETE plantea la necesidad de:

Fortalecer la interlocución de Movete en lo local y regional. Al ir a las juntas de acción comunal, por ejemplo, el equipo local que debemos ir consolidando, es quien acompaña como MOVETE en los territorios. Si bien es importante reconocer y destacar los esfuerzos de los procesos locales, en

el ámbito articulador, quienes construyen MOVETE son precisamente los líderes, lideresas y procesos locales y comunitarios. Es importante que éstos, fortalezcan y visibilicen al MOVETE en sus acciones territoriales. De esta manera, se hace imprescindible la interlocución política como MOVETE en lo local, regional y nacional. (Bernal y Osorio, 2018, p. 224)

Fundamentando una justicia que no se limita a la paridad participativa, sino que “evoluciona mediante un autoexamen de sí y los eventos humanos a los cuales debe atender” (Olmos, 2015, p. 15), situándose en un marco de justicia en el que se identifica la acción democrática incluyente y que permite esa participación igual para todos los habitantes de una comunidad. Fraser, a partir de estos tres elementos propone “la construcción de una sociedad más justa, ordenada y asegurada por procesos de deliberación democrática entre las culturas en interacción” (Olmos, 2015, p. 5).

Es ahí justamente, donde el movimiento cívico y el MOVETE se ajustan a una justicia que enuncia como principios fundamentales estos tres aspectos, siendo la representación política y la participación, ese punto final que les posibilita visibilizarse en un contexto que ha estado controlado por los intereses de megaproyectos.

Abordar un caso específico de movilización, como fue el Movimiento Cívico y lo que es ahora el MOVETE, conocer la historia de sus luchas y resistencias por un tema tan sentido como el territorio y la defensa de los recursos naturales, saber que el contexto ha estado caracterizado, sobre

todo, por una imposición de proyectos con grandes beneficios para el modelo de desarrollo, pero no para las poblaciones que han venido sufriendo los problemas que se originan a partir de estas obras; son aspectos que impulsan el desarrollo de un trabajo como este, puesto que estas acciones colectivas, sus motivaciones y sus luchas reivindican no solo los derechos de estas comunidades del Oriente antioqueño, sino de todas las poblaciones que se han sentido vulneradas por ese gran sistema que recae sobre los territorios y su riqueza. Se pone en cuestión, además, lo que se está haciendo con los recursos, las afectaciones ecológicas y ambientales que pueden ser irreversibles y el daño causado a los habitantes, dejado en entredicho las acciones estatales; aspecto que nos convoca y afecta a todos como sociedad.

## Conclusiones

El Movimiento Cívico del Oriente antioqueño y actualmente el MOVETE, son dos movimientos que se caracterizan por la defensa del territorio, los recursos naturales y la vida; desde sus repertorios de movilización se han dado diferentes acciones que han visibilizado esa serie de luchas, reivindicaciones y replanteamientos de una visión comunitaria contra el modelo de desarrollo que ha establecido megaproyectos a gran escala en territorios que antes se consideraban improductivos, imponiendo nuevas dinámicas sociales y económicas con consecuencias ambientales y de orden social. Estos movimientos se recogen en los planteamientos de un enfoque

latinoamericanista, que propone como matriz de análisis la indígena comunitaria, enlazada con ese discurso ambientalista y la defensa territorial. Así mismo deben ser analizados desde la teoría de justicia de Nancy Fraser que abarca los aspectos de redistribución, reconocimiento y representación, que realizan aportes significativos para abordar y satisfacer las demandas por las que abogan estos movimientos.

Dentro de la historia de regiones como el Oriente antioqueño, se lleva el peso de una violencia que atacó territorios que llevaban una vida tranquila, y se convierten en territorios vulnerables y puntos estratégicos para la extracción. Sin embargo, son importantes las nuevas acciones que se emprenden para la defensa de la vida, las cuales resuenan en las comunidades y en el sistema político.

Con el estudio de estos casos, es evidente cómo la visión de justicia debe ser ampliada, pues se distancian de las tradicionales demandas que estaban direccionadas a una sola categoría de injusticia bien sea por el reconocimiento, la distribución, la representación o cualquier otra. La sociedad actual es una sociedad compleja, donde no existen identidades fijas e incompatibles, sino que los límites de lo “lógico” han mutado, y han pasado de ser estáticos a ser móviles. Por esto, las demandas sociales se han complejizado en términos de que una justicia unidireccional se puede quedar corta al momento de dar lugar a las reivindicaciones sociales.

Así mismo, es importante reflexionar acerca de lo que se entiende por desarrollo y territorio. Ambos conceptos

deben ser abordados desde una perspectiva mucho más amplia, puesto que dentro de los territorios el desarrollo esperado no es solo económico, sino un proceso mediante el cual las comunidades se encuentren en armonía con el espacio, el yo y el otro; es decir, con el territorio.

## Referencias

- Arango, J. C. (2018). *Ramón Emilio Arcila Hurtado, sus luchas por la educación y el movimiento cívico del Oriente antioqueño. 1960-1989* (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Colombia.
- Ávila, N. & Montenegro, J. (2018). Movilización social, procesos educativos y autonomías relativas: el caso de la región del Oriente del departamento de Antioquia, Colombia. *Revista Pegada*, 19(2), 378-409.
- Bernal, J. & Osorio, O. (2018). Plan estratégico, balances y proyecciones del MOVETE. En *MOVETE, Memorias y resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente Antioqueño* (pp. 207-234). Medellín, Colombia: Periferia.
- Fraser, N. (2006). Reinventar la justicia en un mundo globalizado. *New Left Review*, 36, 31-50.
- Fraser, N. & Honneth, A. (2006). *¿Redistribución o reconocimiento?* Madrid: Morata.
- Granada, A. & Rupp, L. (2018). Del Movimiento Cívico del oriente antioqueño. En *MOVETE, Memorias y resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente Antioqueño* (pp. 21-88). Medellín: Periferia.



- Martins, A. (4 de noviembre de 2010). Amartya Sen: “El desarrollo es más que un número”. BBC. Recuperado de: [https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101103\\_desarrollo\\_libertad\\_entrevista\\_sen\\_aw](https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101103_desarrollo_libertad_entrevista_sen_aw)
- MOVETE. (2018). *Memorias y resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente Antioqueño*. Medellín, Colombia: Periferia.
- Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño: una persecución que será resarcida. (28 de mayo de 2018). VerdadAbierta.com. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/movimiento-civico-del-oriente-antioqueño-una-persecucion-sera-resarcida/>
- Novoa, E. (2009). *Luchas cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia: Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, Movimiento popular los Inconformes y Comité de Integración del Macizo Colombiano*. Bogotá: CIMA.
- Olaya, C. H. (2012). *Nunca más contra nadie. Ciclos de violencia en la historia de San Carlos, un pueblo devastado por la guerra*. Bogotá: Cuervo Editores.
- Olaya, C. H. (2017). El exterminio del Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia. *Ágora USB*, 17(1), 128-144. <https://doi.org/10.21500/16578031.2815>
- Olmos, A. M. (2015). *La teoría de la justicia democrática en Nancy Fraser* (tesis de pregrado). Universidad de Cartagena, Colombia.
- Salazar, A. (2018). Acciones Colectivas del MOVETE: caminos de reivindicación e incidencia por la defensa del territorio. En MOVETE, *Memorias y resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente Antioqueño* (pp. 135-174). Medellín: Periferia.
- Soler, J. P. (2018). *semillas.org.co. Semillas*. Recuperado de: <http://www.semillas.org.co/apc-aa-files/353467686e6667686b6c-676668f16c6c/4-juan-pablo-soler.pdf>
- Svampa, M. (2010). Movimientos sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina. *Working Papers*. Recuperado de: [https://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/owp-working\\_paper\\_2010\\_01.pdf](https://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/owp-working_paper_2010_01.pdf)
- Svampa, M. (2012). Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina. *OSAL. Revista del Observatorio Social de América Latina*, 13(32), 15-38.
- Svampa, M. (2017). Cuatro claves para leer América Latina. *Nueva Sociedad*, 268, 50-64.
- Villada, M. & Jiménez, A. (2018). La lucha por la defensa de lo común: aproximaciones a los conflictos socioambientales desde Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio MOVETE. En MOVETE, *Memorias y resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente Antioqueño* (pp. 89-134). Medellín: Periferia.

AINKAA 